

## ***Bolivia: cambio e incertidumbre***

Daniel E. Moreno Morales<sup>1</sup>

Bolivia es uno de los países con más bajo desarrollo en América Latina; el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pone a Bolivia en el penúltimo lugar en la región, apenas por encima de Guatemala. Al mismo tiempo, Bolivia presenta uno de los niveles de desigualdad social más altos del continente: el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad económica en una población, es uno de los más altos de la región, de acuerdo a la misma fuente. A estas condiciones se suma que, como herencia del pasado colonial, la pobreza y la desigualdad están fuertemente ligados a las diferencias étnicas y culturales existentes en la sociedad boliviana, de manera que los sectores indígenas y mestizos, mayoritarios en el país, generalmente son los menos favorecidos en una sociedad subdesarrollada y desigual.

Este escenario de pobreza e inequidad contrasta con la relativa abundancia de recursos naturales existentes en el territorio boliviano. Además de la conocida riqueza mineralógica, ubicada principalmente en la zona andina del país, las últimas décadas del siglo XX han permitido la visibilización de los recursos existentes en la zona oriental del país, ubicada entre las llanuras amazónicas y del río de la Plata; tierras, madera, biodiversidad, petróleo y gas natural. Los procesos de privatización y captación de capital emprendidos agresivamente por el país durante la década de los 90 permitieron el descubrimiento y acreditación de importantes reservas de gas natural (las segundas en la región luego de Venezuela), lo que puso al país en una posición estratégica en una región en crecimiento y con una demanda de energéticos insatisfecha.

Pero la gran expansión de las reservas de gas durante la década pasada no vino acompañada por un impacto inmediato y perceptible de la actividad petrolera en las condiciones de pobreza y desigualdad existentes en el país. Esta circunstancia agravó los problemas de legitimidad de un sistema político con escasa confianza de parte de la población, y resultó en un escenario de inestabilidad por el que transitaron cuatro presidentes entre 2002 y 2005, pero que parecía resuelto con la elección de Evo Morales y su posesión como Presidente de la República en enero de 2006.

Morales es un actor visible de la política boliviana desde hace alrededor de dos décadas, cuando apareció como dirigente de los productores de hoja de coca de la región del Chapare. Este personaje de origen indígena y pobre y con escasa educación formal destacó por su liderazgo carismático y fue identificado por una gran proporción de la población boliviana como alguien que por su experiencia de vida estaba más cerca de sus problemas y de su realidad. Su discurso fuertemente antiimperialista y basado en la revalorización de lo indígena contribuyeron a incrementar su popularidad, pero lo que probablemente determinó su protagonismo político es su posición a favor de la nacionalización de los recursos naturales y la redistribución de la renta proveniente de ellos (particularmente del gas natural).

---

<sup>1</sup> El autor es Ph.D. en ciencia política e investigador de *Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública* en Bolivia ([www.ciudadaniabolivia.org](http://www.ciudadaniabolivia.org)).

Morales fue elegido como Diputado Nacional para la legislatura de 1997; el año 2002 obtuvo el segundo lugar en una muy reñida elección presidencial, mientras que en las elecciones presidenciales de 2005 obtuvo un 54% sin precedentes en la historia reciente de la democracia boliviana. Con niveles de popularidad tan altos y con una agenda basada en las demandas de los movimientos sociales más notables del país, las perspectivas de estabilidad política parecían favorables. La gestión de Morales se vio fortalecida por una negociación favorable con las compañías petroleras internacionales que trabajan en el país que aceptaron tributar sustancialmente más al Estado que anteriormente. Este factor, sumado al importante incremento en los precios internacionales de los hidrocarburos, resultó en una gran liquidez estatal que se tradujo en inversiones y, por supuesto, en más popularidad para la gestión presidencial.

La elección de Morales el año 2005 fue también la primera elección en la que los bolivianos escogieron por medio del voto a los prefectos departamentales (autoridades máximas de la administración estatal del nivel *meso*), que hasta entonces eran designados por el Presidente de la República. Esta elección, resultante de la demanda de las regiones por mayor descentralización y autonomía, confirmó gran legitimidad a las autoridades departamentales y fortaleció aún más el movimiento autonomista.

Los problemas políticos para el gobierno de Morales empezaron durante la realización de la Asamblea Constituyente, institución que para producir un nuevo texto constitucional requería de acuerdos entre la mayoría favorable al gobierno y la minoría opositora. Los acuerdos al interior del cónclave constituyente resultaron imposibles, y la mayoría forzó la evacuación de un texto sin consensuar y que no recogía las demandas de autonomía como esperaban los departamentos autonomistas (que son además los mismos donde la industria petrolera y gasífera funciona).

De acuerdo con sus aspiraciones de gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Morales parte de una visión en la que la dimensión política prima sobre la jurídica e institucional; esto ha sido reconocido en distintas oportunidades por altos representantes del poder ejecutivo, incluido el mismo Presidente. Esta primacía de lo político ha resultado en la desarticulación del Tribunal Constitucional y en una tendencia a desdeñar el cumplimiento de la ley más o menos generalizada en el país. Si bien esta estrategia podría haber permitido mayor agilidad en la aprobación de las medidas de cambio del gobierno y del mismo nuevo texto constitucional, la situación también fue aprovechada por la oposición en los departamentos opositores, que empezaron a generar normativas contrarias al proyecto del gobierno nacional y en muchos casos también contrarias al orden constitucional vigente.

Esta combinación de factores resulta en un escenario de alta tensión que enfrenta al gobierno nacional con las administraciones departamentales de cinco de los nueve departamentos del país sin que existan condiciones para resolver las disputas por medio de canales institucionales. Al ser rebasado el marco institucional del conflicto, los ciudadanos se involucran en él de manera cada vez más activa, lo que genera un cuadro preocupante de polarización de la opinión pública y suscita choques y enfrentamientos civiles.

Los bolivianos vivimos hoy en un clima incertidumbre, con urgencia de cambio pero con dudas sobre la sensatez de nuestros líderes políticos y sobre la capacidad de nuestras instituciones democráticas para sobrevivirlo.

Septiembre de 2008